

en Ciudad Madero, Tamaulipas, está el aplauso prematuro. A fin de cuentas, no resultan muy positivas para la salud cívica de los mexicanos las ganas instantáneas de creer mostradas públicamente por algunos miembros de la intelectualidad mexicana, que con cartas abiertas dirigidas al Presidente (pero quizá inspiradas desde el gobierno, como lo sugieren las declaraciones de Antonio Alatorre aparecidas en el último número de una revista capitalina), nos invitan a los lectores de periódicos a interpretar la acción del 10 de enero y sus secuelas, como una medida tomada básicamente con el "fin de hacer respetar la ley" y de avanzar en el camino de la democracia. A estas alturas de nuestra historia, este tipo de credulidad no se justifica entre personas cuyo oficio es, precisamente, el del análisis crítico de la realidad. Si el respeto a la ley fuera el móvil principal de la consignación de la Quina y su grupo ante el juez, tal y como lo pretenden los escritores, científicos y artistas firmantes, entonces y para empezar, el actual equipo de gobierno hubiera debido de tener una conducta el 6 de julio pasado muy distinta de la que efectivamente tuvo, y su composición, a partir del 10 de diciembre, debería haber sido bastante distinto de la que finalmente fue. No; no creo que, por ahora, nos convenga tratar lo que efectivamente ocurrió entre el gobierno y los líderes petroleros, como si ello fuera equivalente a lo que debería haber ocurrido. Con una tradición política autoritaria y presidencialista tan persistente como la nuestra, la credulidad no resulta ser una virtud, sino lo contrario.

Pasemos ahora a otro punto relacionado con los anteriores. Como es sabido, las crisis políticas como la que hoy está teniendo lugar en la relación entre el gobierno y el sector obrero encuadrado en el partido del Estado, producen, entre otras cosas, verdaderas radiografías del sistema. En efecto, resulta que no hay como el surgimiento de situaciones críticas que pongan en tensión a las variables centrales del arreglo político, para poder apreciar con claridad la verdadera estructura del poder que nos domina. La ruptu-

ra de la rutina que significan sucesos como los ocurridos el 10 de enero, levanta el velo de las formas y permite al observador darse cuenta, al menos por un momento, de qué es lo realmente central y verdadero y qué es lo falso y accesorio en las relaciones de poder de nuestro sistema político.

★

Así, por ejemplo, con la supuesta caída del sistema de cómputo electoral el 6 de julio pasado, las elecciones perdieron su tradicional carácter rutinario y anodino. Ante el inesperado y vigoroso desafío de la oposición, el sistema político, en su conjunto, entró en crisis. Para sostenerse en el poder, el priismo debió usar el poder desnudo, y perdió legitimidad. Los verdaderos mecanismos por los cuales la clase política actual se mantiene en el poder —esos que la Constitución no registra o abiertamente condena— se hicieron entonces visibles como pocas veces. Lo mismo volvió a suceder la semana pasada cuando el ejército —que no la policía— sacó de su casa en Ciudad Madero, por la fuerza y semidesnudo, al poderoso líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, para sin mayor contemplación ni trámite, enviarlo prisionero y por la vía aérea a la capital. A raíz de esta acción, la naturaleza real del sistema político mexicano volvió a quedar al descubierto. De manera cristalina se vio cuál era el navel de la Presidencia y el del sector obrero oficial, el del ejército y el de la policía, el de los medios masivos de difusión y el de los intelectuales, el del PRI y el de los partidos de oposición, el de la cúpula empresarial y el de la Iglesia, etcétera.

Para destruir a La Quina y a su corrupto y extenso imperio sindical, la Presidencia debió pagar un precio. Este consistió en exponer a la vista de México y del mundo la naturaleza íntima de la vieja alianza entre el gobierno y el sector obrero organizado dentro del partido de Estado. Hernández Galicia y sus secuelas llevaron a acumular esos miles de millones de pesos y dólares en propiedades, jovas y efectivo, que hoy son objeto de escándalo, porque el poder presidencial se lo permitió; sobre esto no hay duda. La tradicional alianza de conveniencia entre presidencia-

19/Enero/1989

La Cara Oscura del Ejercicio del Poder

## El Sistema y sus Radiografías

- ★ Para Destruir a La Quina se Debió Pagar el Precio
- ★ Descalificación Brutal de las Raíces del Gobierno
- ★ Quizá la Parte Fácil de la Tarea que CSG se Impuso

LORENZO MEYER

Salvo por un puñado de asociados, no es comprensible ni justificable que alguien en México derrame una lágrima por la suerte que ha corrido Joaquín Hernández Galicia a manos de sus antiguos aliados gubernamentales. En principio, la izquierda debería ser la que menos lamentara la caída del viejo y brutal cacicazgo petrolero. Desgraciadamente, no ha sido ese el caso, y hoy vemos con sorpresa y decepción cómo la izquierda se halla abiertamente dividida por un motivo inverosímil: ¡Por un conflicto en el seno del grupo enemigo! ¡Increíble! Ayer, hoy y siempre, las alianzas tácticas de fuerzas supuestamente democráticas con personajes e intereses como los representados por La Quina son inaceptables. A estas alturas del siglo XX, la izquierda, mejor que nadie, debe saber que el fin —en este caso la lucha contra el autoritarismo priista— no justifica los medios: la cooperación con el sindicalismo gangsteril que ha dominado la vida de la organización obrera de los petroleros desde, por lo menos, la época de Pedro Vivanco.

En el otro extremo del espectro de las tomas de posición ante la destrucción del cacicazgo con sede

SIGUE EN LA PAGINA DIEZ

# y sus Radiografías

lismo y sindicato corrupto y antidemocrático, alcanzó uno de sus puntos culminantes cuando precisamente el Presidente Miguel de la Madrid declaró públicamente que el petrolero era un sindicato ejemplar. Así pues, lo que hoy está ocurriendo, pone al descubierto la obscenidad de una de las políticas centrales del sexenio pasado —del cual el actual equipo gobernante es heredero directo— y que es la de la tan mencionada pero nunca cumplida renovación moral.

Al decidir el Presidente Salinas que era impostergable la reconversión del viejo sindicalismo (su costo económico ya no corresponde a su contribución a la producción ni a la preservación del sistema), se decidió que el mejor lugar para iniciarla era el sindicato petrolero, y que para ello se requería de la destrucción del segundo hombre más fuerte dentro del Congreso del Trabajo (el primero es Fidel) y el más corrupto. Si la maniobra tenía éxito —y lo tuvo—, el resto del proceso quedaría sujeto a la llamada lógica del dominó: la caída de la ficha clave lleva a la caída de las demás. Sin embargo, para lograr el objetivo buscado, el líder disfuncional y el sistema —la parte y el todo— se vieron forzados a mostrar sus intimidades; a hacer una especie de **striptease** involuntario del que todos fuimos y seguimos siendo testigos. Ahora bien, para la mayoría de los espectadores, esas desnudeces son sencillamente deplorables y ahondan —si es que tal cosa es posible— el desencanto de los gobernados respecto a los gobernantes, de los dirigidos frente a sus dirigentes.

Por un lado, la exposición pública de las intimidades escandalosas del sistema —exposición necesaria para deslegitimar plenamente al líder caído y tratar de legitimar a la fuerza que lo derribó— producen en una parte del público un placer morboso. Con este conocimiento de los detalles sórdidos —las cifras estratosféricas de recursos ilegalmente a disposición de los líderes petroleros, los asesinatos que ordenaron, los negocios millonarios que emprendieron, sus ejércitos privados, sus mansiones, diversiones caligüescas, etcétera—, la humillación cotidiana de los sin poder, toma momentánea venganza en las fotos

de La Quina, desaliñado y declarando tras las rejas, o en las de Salvador Barragán a punto de morir en una cama del Seguro Social —¡él, que era el rey de Las Vegas!— al no poder resistir la crisis nerviosa que le produjo el saber que se había quedado sin poder y a merced de sus enemigos. Por otro lado, esta exposición de la cara obscura del ejercicio del poder en México, también puede producir una enorme sensación de vergüenza en quien se ve obligado a contemplarla, justamente como le ocurrió a Sancho Panza cuando su señor, cubierto apenas por un camisón, decidió dar “dos zapatetas en el aire y dos tumbas cabeza abajo”, y en el proceso dejó al descubierto cosas que, “por no verlas otra vez”, hicieron que el fiel escudero se alejara del lugar más que de prisa. No hace mucho el nuevo canciller se dolió de la pérdida de prestigio internacional de México; bueno, no hay duda de que una fuente importante del actual desprestigio del sistema político mexicano en el exterior lo es precisamente el tipo de revelaciones que hoy está haciendo el gobierno en torno de su antiguo aliado, y este problema no se va a resolver nombrando embajadores a ejecutivos privados.

★

En resumen: la forma espectacular como se ha procedido a iniciar el desmantelamiento del que fue el soporte central del sistema político mexicano a partir de la segunda mitad de este siglo —el sector obrero incorporado al PRI— es también una descalificación brutal, gigantesca, de las raíces del régimen y del gobierno actuales. El proceso contra Hernández Galicia y sus asociados, documenta y confirma plenamente la mala imagen que una buena parte de la opinión pública tiene sobre la naturaleza del poder en el México moderno. La añeja sospecha sobre la enorme corrupción, ilegalidad y violación de la ley que se esconde tras la red de alianzas cunulares que son la raíz y razón del actual sistema autoritario mexicano hoy se vuelve casi una certeza y lugar común: lo que ocurrió en el pasado reciente entre la presidencia, La Quina y Pemex, por fuerza de la lógica, tienen que repetirse, en diferente escala, desde luego, en cientos o miles de relaciones que en este momento mantienen los gobiernos Feder-

ral, estatales y municipales, con otras organizaciones de trabajadores, de profesionales o de empresarios que el poder acepta como sus interlocutores convenientes en el proceso de controlar políticamente a la sociedad.

Ya lo señaló hace más de un siglo Alexis de Tocqueville: si el sistema condena su pasado —y eso es lo que hoy se está haciendo al castigar a La Quina—, entonces debe de estar preparado a romper totalmente con él; a iniciar con un borrón la cuenta nueva; a proceder sistemáticamente con todas las otras “Quinas” que siguen existiendo. Si no procede así, radicalmente, más valiera nunca haber intentado nada, pues habrá perdido el respeto para lo que fue y no lo habrá ganado para lo que es.

Al exponer con toda su crudeza la corrupción y crímenes de personajes como Joaquín Hernández Galicia, Salvador Barragán Camacho, José Cruz Contreras o Sergio Bolaños Quezada, el gobierno no puede evitar —es imposible— que el observador del gran espectáculo montado contra la directiva petrolera, no se detenga en La Quina y se pregunte y especule en torno de cuáles y cuántos serán los esqueletos que hoy están escondidos en los amplios closets de los ex presidentes, en los de varios de los miembros del actual y pasados gabinetes, en los de los directores de las poderosas empresas paraestatales, en los de los jefes de las innumerables policías que padecemos, en los de un buen grupo de gobernadores, en los de embajadores de reciente cuño, etcétera. Al contemplar a “empresarios” tan cargados de negocios y millones como Cruz Contreras o Bolaños Quezada, uno no puede menos que preguntarse cuántos de los actuales “capitanes de industria” no son o fueron prestanombres de otros tantos “capitanes de la política” al estilo de La Quina. Al desnudar a Hernández Galicia el sistema no sólo ha puesto punto final a la carrera de un personaje siniestro que desafió tanto a presidentes como a la opinión pública, sino que también ha abierto una expectativa que no será fácil cumplir.

Si todo lo anterior es válido, entonces quizá la destrucción de La Quina sea la parte fácil de la tarea que Carlos Salinas se acaba de imponer.